

venientes surgidos con Carter. Que el apoyo de la CIA a la ofensiva contrarrevolucionaria en América Central fuera una operación secreta en los Estados Unidos no debía ser mayor obstáculo. Y no fue la única dificultad imprevista: cuando Reagan quiso suspender las sanciones aplicadas por su antecesor, el Congreso le exigió que demostrara la "mejoría en la situación de los derechos humanos en el país", cosa que no pudo o no quiso hacer, por lo que el embargo a la venta de armas continuó vigente. La Argentina debió seguir abasteciéndose de países con diplomacias menos exigentes, como Francia e Israel.

Galtieri estimaba que la "revolución neoconservadora" en marcha en los Estados Unidos, y que ya venía avanzando también en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, le daría la razón en todo al Proceso, dado que compartía el fervor anticomunista, la opción militar para los países del Tercer Mundo en aprietos, las privatizaciones y el ajuste fiscal para contener a los sindicatos. De modo que el viento soplaría a favor de su plan de "profundizar" el curso. El único obstáculo para ese plan era, a sus ojos, el frente interno, no el externo: había que reconquistar el alma de la sociedad, recuperar el entusiasmo perdido, lo que sería difícil de lograr en medio de la crisis y con una política que descargaba cada vez más masivamente sus costos en los salarios. No fue para nada sorprendente que a fines de marzo de 1982 el sector de Miguel y Ubaldini, que ya se conocía como "CGT Brasil" (por la calle donde abrió su sede), convocara a una concentración en Plaza de Mayo (a la que incluso se plegó la "CGT Azopardo" de Triaca), y el régimen se viera forzado a disolver la manifestación con una dura represión que lo mostró por primera vez en años peleando por controlar la calle, y peor aún, contra manifestantes que desafiaban a la policía.

La carta en la manga para resolver estos problemas eran los planes para invadir Malvinas, que se venían elaborando desde el comienzo mismo del Proceso. Massera había hecho redactar uno. Anaya lo había imitado, y ahora encontró buen eco en su par del Ejército. El operativo se lanzó, un poco antes de lo previsto debido a la protesta sindical y los apuros económicos, el 2 de abril de 1982. Y fue, en varios aspectos, un éxito rotundo. Al haber preservado el secreto hasta último momento, la ocupación de las islas fue rápida e incruenta. El apoyo de la opinión pública y la dirigencia civil fue tan amplio y entusiasta que Galtieri pudo asomarse al balcón de la Casa Rosada y ver una Plaza de Mayo colmada. Los asistentes se cuidaron de vivarlo, pero le dieron esperanzas de que, si todo salía bien, llegarían a hacerlo. Los sindicatos y la Multipartidaria aceptaron suspender sus reclamos por salarios, reactivación y apertura

en pro de la "causa nacional", y hasta Montoneros ofreció su colaboración desde el exilio. Las Madres proclamaron que "las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también", olvidando que muchos no lo eran: hasta los derechos humanos debían ahora nacionalizarse para ser legítimos. Y, como marco de todo ello, hubo algo que el régimen extrañaba desde la "campana antiargentina" y que lo volvió a aproximar a los fenómenos fascistas: la masiva y activa disposición de la sociedad a acallar a los disidentes.

La causa "Malvinas"

La causa Malvinas fue ocasión para que periodistas, artistas y dirigentes de toda laya, incluso algunos a los que el régimen había tratado bastante mal, participaran con entusiasmo de actividades públicas que celebraban la "recuperación de las islas" y censuraban a las pocas voces que se atrevían a recomendar prudencia o desalentar una escalada. Voces entre las que se contaban dos que habían sido hasta entonces mucho más proceasistas que la media, Álvaro Alsogaray y Arturo Frondizi, pero que entendían algo más que el resto de política internacional; y otra que no lo había sido tanto, Raúl Alfonsín, y que, tras ser criticado por su partido (incluso por Illia y miembros de su propio sector), optó por guardar silencio.



Plaza colmada el 2 de abril de 1982. Archivo La Nación. ▀

Sin embargo, el escenario diplomático y la actitud británica frustraron desde un principio las expectativas de la Junta. A horas de la invasión, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una resolución que la condenaba y ordenaba a la Argentina retirar sus tropas, que fue votada incluso por países favorables a la descolonización pero no a avalar el uso de la fuerza, menos aún si quienes vivían en las islas no eran ciudadanos argentinos ni deseaban serlo (como vimos en el capítulo 3, este aspecto hacía de Malvinas un caso distinto de otros que la ONU consideraba colonias). El argumento de la Junta de que no había habido avances en la negociación fue desestimado: los lazos comerciales y culturales con los isleños se habían incrementado desde 1965 y se estaban barajando alternativas para una solución de compromiso (por ejemplo, una administración compartida). La invasión, por el contrario, disculpaba a los británicos por no haber cedido más y los eximía de dar explicaciones. Así lo entendió Thatcher cuando, con el respaldo de la ONU y contabilizando los problemas internos que enfrentaba su gobierno, no dudó en hacer lo que la Junta había casi descartado que hiciera: puso en marcha una costosísima operación militar para recuperar las islas por la fuerza si los argentinos no se retiraban. Lo peor fue que la Junta militar lo consideró una fanfarronada ante la cual convenía escalar el conflicto, de modo que envió más tropas y equipos a lo que se rebautizó "Puerto Argentino", designó gobernador a un general e instauró un nuevo estatus legal para sus habitantes. Galtieri argumentó que el entusiasmo del pueblo con la "causa" era tal que no podía ceder en nada. Pero lo cierto era que a su criterio no tenía por qué hacerlo: los británicos no podrían revertir la ocupación por las armas ni tampoco obtener mucho en una mesa de negociaciones. Además, y por sobre todo, la invasión de Malvinas no había sido para él ni para la Junta un recurso desesperado para ganar tiempo o salir del paso ante la protesta social, sino más bien la llave para contrarrestar una larga serie de frustraciones argentinas con sucesivos proyectos de expansión económica, política y militar. No podían por lo tanto conformarse con menos que una victoria total que redimiera a las islas y al país.

Ello explica que no se haya prestado mayor atención a las oportunidades de acuerdo. La más seria fue la que se presentó cuando el Departamento de Estado estadounidense, corriendo el riesgo de enemistarse a los Estados Unidos con su más importante aliado, propuso implementar lo que hasta la ocupación se había estado discutiendo: una administración compartida. Thatcher respiró aliviada cuando se enteró de que el gobierno argentino había rechazado esa oferta, que le hubiera

resultado muy difícil presentar a sus connacionales como algo diferente de una derrota.



Leopoldo F. Galtieri y Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de las Islas Malvinas, en ocasión de la visita de Galtieri a las Islas el 22 de abril. Revista Gente, abril de 1982.

En la fatal decisión de la Junta pesó la expectativa de que las fuerzas británicas finalmente se detuvieran, o que fueran detenidas por los estadounidenses. Pero, lejos de hacerlo, éstos comenzaron a colaborar militarmente con Thatcher. Los cálculos sobre la importancia de la operación represiva en América Central, en que militares argentinos y agentes de la CIA cooperaban, terminaron de desmentirse. En vez de revisarlos para responder a la imprevista situación, Galtieri los sustituyó por otros, opuestos, con el objetivo de insistir en la tesis que lo había metido en la boca del lobo: en nombre de un regionalismo ya no anticomunista sino abiertamente antiimperialista, buscó la solidaridad de los gobiernos democráticos de Perú y Venezuela y hasta la del régimen cubano. De ellos recibió lo único que podían darle: gestos y palabras de aliento. Amenazó entonces a Estados Unidos con "extender el conflicto" pidiendo la colaboración militar de la Unión Soviética y convocó a las fuerzas vivas de la sociedad —políticos, sindicalistas, periodistas, obispos, empresarios y artistas— a recoger el mundo para explicar que el conflicto no obedecía a una ocurrencia de déspotas desorbitados sino al reclamo de todo un pueblo contra el atropello de un poder imperial que ya llevaba

ciento cincuenta años. Los derechos argentinos seguían siendo irrefutables. Pero los emisarios se vieron en figurillas para explicar por qué apoyaban un acto violatorio del derecho internacional contra una potencia a la que no había muchas posibilidades de imponerse por la fuerza. Por otra parte, si Argentina tenía éxito en su intento, ello seguramente redundaría en la continuidad de una dictadura criminal y destructiva.

Como sea, la guerra se había vuelto inevitable. Se inició el 2 de mayo con el hundimiento del crucero General Belgrano, un acto brutal con el que los británicos cerraron la puerta a cualquier otra negociación. La Junta, en parte por falta de preparación para un conflicto como el que se iniciaba y en parte por no haber tomado en serio que fuera a producirse, no había organizado una defensa eficaz. Muchos de sus recursos más valiosos seguían en el continente o estaban desplegados sobre la frontera con Chile. Salvo en las operaciones aéreas (con las que las fuerzas argentinas lograron dañar o hundir varios barcos británicos), desde un principio quedó en evidencia la superioridad tecnológica, profesional y de conducción del adversario. Gran Bretaña tomó el control del espacio aéreo y naval en torno a las islas, eliminando la ya escasa movilidad de los defensores, a pocos días de iniciadas las acciones. A fines de mayo estableció una cabeza de playa al sur de la capital, donde se concentraban las tropas argentinas, que ofrecieron todavía una desesperada resistencia apoyada esporádicamente por aviones de la Fuerza Aérea. Finalmente, el 14 de junio, y pese a que Galtieri había ordenado "combatir hasta el último hombre", se rindieron. Alrededor de 700 argentinos y 300 británicos murieron en la contienda.

Un relato de la guerra

—¡Con qué ganas me comería un pichiciego! —dijo el santiagueño [...]. Había porteños, formoseños, bahienses, sanjuaninos: nadie había oído hablar del pichiciego. El santiagueño les contó: —El pichi es un bicho que vive debajo de la tierra. Hace cuevas. Tiene cáscara dura —una comparación— y no ve. Anda de noche [...]. Seguían los bombardeos [...] seguían quietos, fumando, o sentados contra las paredes de arcilla blanda y con la cabeza entre las piñamas. De a ratos llegaba el zumbido de los aviones y el tableteo de la artillería del puerto. Tenían hambre, abajo, en lo oscuro. Desde entonces, entre ellos, empezaron a llamarse los "pichis".

Rodolfo E. Fogwill, *Los pichiciegos*, Buenos Aires, Interzona, 2006. ▀

La noticia cayó como una bomba en el ánimo de la población, que había querido creer la versión difundida por los medios locales según la cual las pérdidas del enemigo eran tan grandes que no tardaría en desistir. Miles de personas indignadas salieron a las calles. Como consecuencia de esto, el 16 de junio los generales obligaron a Galtieri a renunciar, mientras la Armada y la Fuerza Aérea se retiraban de la junta buscando cargar éste y los demás fracasos del régimen sobre la espalda de sus pares de tierra. Éstos designaron entonces en soledad al general retirado Reynaldo Bignone para encabezar un nuevo gobierno. Y Bignone anunció inmediatamente el inicio de la transición a la democracia.



Rendición de las tropas argentinas, el 14 de junio de 1982, y retorno de los soldados al continente.

El fin del poder militar y el camino hacia la democracia

Con Malvinas terminó de descomponerse el poder militar. Los oficiales y suboficiales que habían combatido se consideraban traicionados por los altos mandos y la posibilidad de que se sublevaran flotaba en el ambiente. Las Fuerzas Armadas, que habían concebido el Proceso como broche de oro del rol que venían cumpliendo desde 1930 y como una inmejorable ocasión para refundar un orden que las confirmaría como guardianas del bienestar colectivo, debieron resignarse a dejar el poder en condiciones mucho peores a las padecidas en mayo de 1973: el re-

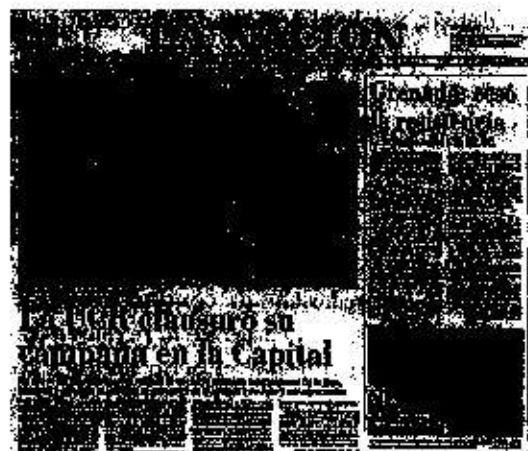
pudieron que entonces habían recibido de la juventud peronista se había transformado ahora en un hecho cotidiano y generalizado: lo sentían cada vez que salían a la calle vistiendo el uniforme. A ello se sumó la ausencia de liderazgos, fruto del descrédito de los comandantes retirados y de la "selección negativa" en las cúpulas. Ya no había siquiera facciones en los cuarteles: los fracasos sucesivos y los chivajes cruzados las habían descompuesto y la derrota había terminado de desarmarlas (tardaría varios años en formarse una nueva facción, que recogiera la "comunidad entre pueblo y ejército" sellada el 2 de abril). Hasta sus aliados más cercanos desconfiaban: en la curia, el empresariado y los círculos conservadores se extendió la opinión de que los militares no debían nunca más ejercer funciones para las que no estaban preparados. Todo ello tuvo el efecto benéfico de hacerlos transitar el lapso hasta la entrega del gobierno a los civiles con inusitada docilidad y de un modo casi por completo incruento. Si ese lapso no fue más breve, se debió a que los partidos no estaban preparados para acelerar las cosas y temían el descalabro que podría resultar de ejercer mayor presión sobre Bignone. Tanto es así que, una vez acordado el cronograma que fijó los comicios para octubre de 1983, le dejaron a éste las manos bastante libres para que hiciera lo que pudiera.

Esto tuvo también efectos paradójicos: un gobierno por completo carente de poder pudo tomar decisiones relevantes que condicionarían fuertemente a sus sucesores. Cabe destacar sobre todo aquellas que implementó para congraciarse con empresarios y sindicalistas, desactivando las pujas distributivas que podían complicar aún más la situación y buscando restablecer los lazos entre corporaciones. Por ejemplo, continuó la licuación de pasivos empresariales y su estatización a través de nuevas iniciativas diseñadas por Cavallo, ahora desde la presidencia del Banco Central; otorgó jugosas concesiones petroleras, de obras públicas y hasta de medios radiofónicos y televisivos; extendió la promoción industrial, consistente en generosas reducciones impositivas; inició una apresurada normalización de las conducciones sindicales y, para reelegitimar a las cúpulas tradicionales, les devolvió el control de las obras sociales y concedió aumentos salariales. Indiferente al aumento insostenible del déficit fiscal (que en 1983 llegaría al 16,8%) y la aceleración inflacionaria (que sumó un 343,8% anual), Bignone pudo dar estos pasos porque muchos de ellos eran bien vistos por los partidos, que abogaban por dejar atrás "las políticas de ajuste" aplicadas por el régimen y causantes de todos los problemas; problemas que, según creían, se disiparían en cuanto se adoptaran medidas opuestas y reactivadoras.

Los partidos, además, estaban demasiado enredados con otros menesteres. Isabel Perón dio su aval desde Madrid a una fórmula presidencial compartida con Massera, con lo que terminó de convencer al grueso de la dirigencia política y sindical peronista de que no convenía contar con ella. Pero, al igual que en 1975, esta dirigencia no tenía los medios adecuados para actuar en ausencia del líder o de un heredero. Los sindicalistas tomaron la iniciativa, en parte gracias a que estaban recuperando sus organizaciones: lideraron la campaña de reafiliación al partido y controlaron sus instancias de conducción (Lorenzo Miguel fue designado su vicepresidente, a cargo de la presidencia). Desde allí impusieron a los candidatos, sin poder impedir algunos conflictos bastante violentos, como el que enfrentó a Herminio Iglesias con Antonio Cafiero por la candidatura a gobernador bonaerense: Iglesias se impuso con el apoyo de Las 62 en medio de golpes y denuncias de fraude. Los elegidos para integrar la fórmula presidencial fueron Ítalo Luder y Deolindo Bittel. Aunque eran poco carismáticos y estaban demasiado asociados a los años setenta, Miguel estimaba que bastarían para triunfar: según él, nada había cambiado en el país, salvo que los militares habían probado plenamente que los peronistas eran los únicos capaces de gobernar con legitimidad y que cualquier error u horror que pudieran haber cometido había sido ya superado con creces.

Sin embargo, no era tan seguro que las vueltas de la historia estuvieran poniendo al país frente a la sola opción de jugar una vez más su suerte de la mano del peronismo. En parte, porque algunas cosas sí habían cambiado. Sobre todo en la UCR, que, a diferencia del PJ, experimentó una profunda renovación durante la transición. Renovación que tenía mucho que agradecerle tanto al esfuerzo de Balbín por mantener activa a esta fuerza, como a su desaparición (había fallecido en septiembre de 1981): sin Balbín, el alfonsinismo —hasta entonces minoritario— se impuso en la interna y liberó al partido del lastre de haber querido entenderse con el Proceso, ubicándolo oportunamente a la vanguardia de la denuncia de sus crímenes.

Alfonsín tuvo éxito en esta operación de "reinención" no sólo por los azares de la coyuntura, sino también porque se adecuó a cambios más profundos que se operaban en la sociedad. El repudio total al régimen y a las Fuerzas Armadas, que fue en aumento a medida que se acercaban las elecciones, no sólo expresaba la frustración por los fracasos y el horror por los crímenes que salían a la luz, sino también la necesidad —más profunda y de más largo aliento— de dar vuelta una página de la historia y hacer a un lado a los actores hasta entonces dominantes.



Multitudinarios cierres de campaña de la UCR y el PJ, en las portadas del diario *La Nación*, 27 y 29 de octubre de 1983.

El Proceso podía considerarse ahora el acto final del largo ciclo de decadencia: lo que se había vivido desde 1976 (tal como relataba *La república perdida*, película emblemática de la transición) era la conclusión de un periplo iniciado en 1930 y signado por el militarismo, la falta de respeto a las libertades y al pluralismo, y la violencia creciente. De este modo la transición retomaba, reformulado e incluyendo al Proceso, el relato que éste había querido instalar, manteniendo al peronismo en la difícil posición de ser parte del problema: de allí que, contra la esperanza de Miguel, los horrores de hoy no disculparan tan fácilmente los de ayer.

Este nuevo consenso se fortaleció principalmente en los sectores medios pero también hizo pie en las clases populares. La capacidad de los sindicatos de representar sus intereses había disminuido, e incluso entre los obreros sindicalizados, que pesaban cada vez menos, primaba la desconfianza hacia la viabilidad y la conveniencia de un gobierno controlado por los sindicatos. A muchos de esos votantes les sonaba tentadora la promesa de Alfonsín de que con una democracia pluralista y estable sería posible recuperar la igualdad social perdida, porque "con la democracia se come, se cura y se educa". O por lo menos les sonaba mejor que la cruda advertencia lanzada por Herminio Iglesias, según la cual no había que esperar mucho del restablecimiento de la Constitución y las formas institucionales porque "con ellas no se come" (aunque pronto el país comprobaría que la visión de Iglesias era en cierto modo más realista que la de Alfonsín).

Este consenso democrático y republicano era en gran medida inédito. Ya no se postulaba un movimiento popular que pretendía para sí toda la legitimidad, como había sucedido con el yrigoyenismo y el peronismo. Tampoco existía ya una disputa irresuelta sobre las reglas de juego: con la transición de 1983 se estaba cerrando el largo ciclo de inestabilidad del régimen político. Pero todo esto llegó acompañado, como hemos visto, por una profunda y acelerada desigualdad de condiciones y por la exclusión social de amplios sectores, situaciones que la política de partidos debería tratar de reparar con recursos por demás escasos. Si la historia argentina desde mediados de siglo hasta entonces había sido la de una difícil convivencia entre una sociedad signada por el igualitarismo y la movilización y un régimen político azotado por la ilegitimidad, la que desde entonces se empezó a tejer invirtió los términos y obligó a una democracia aún débil a cumplir la ardua tarea de lidiar con nuevas formas de conflicto, desarticulación y negación de derechos. Algo que se complicaría aún más debido a que, por el momento, la gravedad de esos problemas era difícil de percibir y comprender. Y también porque la adhesión a la democracia nació en gran medida de esa ignorancia y, más que de convicciones muy firmes, de la conciencia de que todas las demás alternativas habían fracasado.